

Seguridad cooperativa regional

OSVALDO IARRÍN**

La fisonomía geopolítica de Posguerra Fría devela una Latinoamérica más pobre y más insegura, a pesar de que la sociedad dispone en la actualidad de mejores condiciones y recursos para su conocimiento, productividad, comunicación y relación social.

Se esperaba que los avances en derecho humanitario, economía de libre mercado y régimen de gobierno democrático garantizaran en mejor forma una convivencia pacífica intra e interestatal, con mejores oportunidades para la superación y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

La confrontación bipolar ideológica se transformó en una interdependencia de personas, organizaciones y países de carácter económico y cultural, bajo la sombra de la globalización que recorre el mundo como un fantasma.¹ Los derechos del hombre y la paz no se han visto asegurados en el nuevo milenio, como pronosticaba Fukuyama, por lo que seguirán existiendo acontecimientos, antes que aconteceres, en rumbo hacia un final de la historia que no se divisa promisorio.²

Los cambios de la fisonomía del poder, debido a las nuevas estructuras y agentes dominantes, generan tensiones y conflictos,³ los cuales alimentan una fuerte tendencia realista a seguir considerando al equilibrio del poder como un conjunto de rivalidades organizadas, en el que la fuerza y la violencia son los recursos esenciales y necesarios para la paz.⁴

Los países con débil estructura económica, poca productividad y reducida capacidad de asimilación de la tecnología, sin poder dinamizar sus recursos, capital y trabajo para incorporarse a la convergencia internacional de los mercados, modernizar sus economías, dinamizar su in-

* General de Brigada del Ejército del Ecuador.

dustria, acumular inversión externa, profundizaron sus desventajas, debilitando aún más la capacidad del Estado para atender las demandas básicas de la población que aseguren un nivel aceptable de bienestar.

Incapacidad a la que debe agregarse una corrupción crónica que definitivamente ha ampliado y profundizado la brecha entre los países ricos y los pobres que parecerían estar destinados a permanecer en la turbulenta y conflictiva periferia de la globalización.

La relación Estado-territorio, posición geográfica relativa, los criterios de soberanía e intangibilidad de las fronteras; así como la autoridad de los gobiernos, que tradicionalmente han sido inherentes al concepto del Estado-nación, han sufrido una revalorización de los elementos geopolíticos y han incorporado a nuevos actores con un enorme poder desarrollado por su capacidad económica y ejercicio de la violencia.

El narcotráfico se constituye en un verdadero contrapoder que –aprovechándose de la importantísima posición geoestratégica que posee Colombia con sus dos mares, cercanía al Canal de Panamá, naturaleza, variedad y condiciones de su territorio– ha logrado controlar el mercado y el abastecimiento con más de 880 toneladas, equivalente al 80 por ciento de la coca y cerca de 8 toneladas de heroína, equivalente al 25 por ciento del mercado mundial.

Este actor dominante ha sido el agente de mutación de perfil de lucha ideológica y política subversiva en Colombia, hacia una confrontación político-económica perversa y utilitaria a partir de su inescrupulosa aleatoriedad con elementos de gran peligrosidad y violencia.

El narcotráfico ha financiado a la subversión en 1999 con aproximadamente 607 millones de dólares, completando su presupuesto con USD 458 millones de la extorsión y USD 250,8 millones del secuestro.⁵

La narcoguerrilla, como nuevo actor estratégico, pretende reemplazar al Estado como institución político-jurídica única responsable por la protección, administración y dirección de la nación en su conjunto.

Dentro de este contexto, las FARC representan la principal amenaza a la seguridad, al orden jurídico y a la democracia de la región como se puede observar en el objetivo político planteado por Marulanda: “*Establecer el control político sobre el territorio nacional, que puedan conquistar para establecer un régimen marxista*”; lo cual implica suplantar la autoridad y legitimidad del gobierno en el territorio mediante una lucha prolongada que debilite a las instituciones y neutralice la acción de las FFAA. Ideología subversiva de la guerra revolucionaria que ha integrado en un

solo *continuum* de violencia, al narcotráfico y al crimen organizado, que no respetan límites políticos internacionales haciendo de la violencia un vector transnacional de terror y muerte.

En 1999 se registraron en Colombia 5 000 actos terroristas, 551 masacres, 1 663 asesinatos, 2 991 secuestros, 240 desaparecidos y 640 torres de alta tensión destruidas.

La narcoguerrilla y el crimen organizado constituyen un auténtico megapoder delictivo que amenaza la estabilidad regional por su capacidad creciente para dominar e imponer su voluntad en los estados legítimos.

Los cambios de la fisonomía del poder, debido a las nuevas estructuras y agentes dominantes, generan tensiones y conflictos.

La delincuencia organizada transnacional, según la ONU, socava las instituciones democráticas y las fuerzas de la ley y el orden; perturban el frágil equilibrio económico de los estados y destruyen la vida democrática.⁶

La subversión, el narcotráfico y el crimen organizado desparraman violencia, corrupción, impunidad, contrabando, daños a la moral y al medio ambiente. La inestabilidad política y la ampliación de los cultivos de coca a través de la frontera de los países vecinos se amplían como un "efecto balón" hacia los países vecinos, con amenazas a la vida, a la paz, a los valores y a la seguridad de la región. La frontera norte del Ecuador está sintiendo estos efectos.⁷

Se han destruido varias plantaciones de coca y laboratorios clandestinos de procesamiento. Existen más de 2 800 refugiados y periódicamente se producen desplazamientos de familias de la frontera hacia el interior.

Los secuestros, sabotajes, extorsiones en el área petrolera de valor geoeconómico para el país, además de incrementar la inseguridad pública, han afectado seriamente a la actividad productiva y ahuyentado a la inversión extranjera.

La influencia del conflicto vecinal ha transformado el problema social de pobreza en un problema de seguridad interna, ante la imposibilidad de oportunidades más atractivas que las ofrecidas por las actividades ilegales conexas al narcotráfico, como son el empleo de mano de obra en las plantaciones de coca, el contrabando de armas, precursores y de sustancias ilegales para el procesamiento de la hoja de coca.

Prácticamente resulta imposible mantener alejada a la población fronteriza colombo ecuatoriana, históricamente interdependiente y a la vez vulnerable a la captación de su mano de obra, del comercio y múltiples activi-

dades de servicios relacionadas con la industria del narcotráfico, que capta fácilmente a una población desempleada, con gran índice de pobreza, marginalidad, carente de atención y de servicios públicos, muy proclive a relacionarse con actividades delictivas, empujadas por la necesidad de solucionar sus problemas de supervivencia y superación; al mismo tiempo que susceptible a la motivación ideológica subversiva, como desfogue a la frustración, falta de oportunidades y a la sensación de abandono en que vive.

El conflicto colombiano no es por consiguiente solo una amenaza a su seguridad interna, el crimen organizado internacional es mucho más que una extensión del crimen doméstico que se filtra a través de las fronteras, es más bien una amenaza a la estabilidad y a la paz regional, especialmente cuando se apela a la motivación ideológica de movimientos insurgentes coordinados de inspiración bolivariana que, en varias oportunidades, han hecho su aparición pública.

Por lo tanto es urgente la necesidad de reconstruir la nación a través del fortalecimiento y legitimación del poder, el ejercicio de un liderazgo y autoridad auténtica del gobierno, para reducir la violencia y fortalecer la seguridad pública con amplia participación democrática.⁸ Todo un proceso de pacificación interna, como una estrategia nacional colombiana, que se sintetiza en el Plan Colombia, para la paz, prosperidad y fortalecimiento del Estado.

La estabilidad y paz nacional colombiana estará interrelacionada con la estabilidad y paz regional; ya que en la era actual es imposible escapar al dilema de la seguridad entre países vecinos, debido a la interdependencia, lo cual significa que el mejoramiento de la seguridad de uno implica inseguridad en el vecino.

En consecuencia resulta indispensable determinar una estrategia general de acción para neutralizar el poder de la amenaza y contener el conflicto, mientras en uso de su soberanía Colombia logre la estabilidad y la paz.

Empresa difícil pero factible, válida y sustentable, que contradice el pensamiento de académicos pesimistas, como el catedrático de Oxford, Malcom Deas, que consideran que la crisis de Colombia no tiene solución.⁹

La carta de la OEA en su art. 37 menciona que los estados miembros acuerdan juntos buscar una solución urgente a los problemas que afectan al desarrollo económico o a la estabilidad de cualquier Estado miembro, si éste es seriamente afectado por condiciones que no pueden remediar a través de los esfuerzos de ese Estado.

Es imprescindible mantener el respeto al derecho internacional, a la

no injerencia y a la no intervención en asuntos internos de otro Estado, pero al mismo tiempo es necesario comprender la gravedad del problema de la seguridad regional, para conformar un nuevo paradigma estratégico de la seguridad que sirva para atacar a las causas y a los efectos de las amenazas, en coherencia con la nueva concepción de la seguridad, que pone énfasis en la prevención a través de criterios proactivos, antes que reactivos, represivos y de fuerza, sobre los cuales deben diseñarse proyectos de carácter económico, social y político de efectos sociales inmediatos para la protección de fronteras; mientras la estructura militar establezca la cobertura que dé espacio de maniobra y tiempo para la reconstrucción de la paz.

El Plan Colombia para enfrentar esta amenaza ha diseñado un “conjunto de proyectos y acciones de reconstrucción económica, social y ambiental de las zonas más afectadas por el conflicto armado y aquellas con presencia de cultivos ilícitos, con el objetivo de dar viabilidad y sostenibilidad a la construcción a largo plazo”.

Los componentes principales de su estrategia de seguridad interna son: la recuperación económica, el proceso de negociación del conflicto armado, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento institucional y desarrollo social, para lo cual el Plan Colombia ha previsto una inversión de USD 7 500 millones, financiados, USD 1 289 por Estados Unidos y 2 211 por países europeos.¹⁰

La estrategia general de aproximación indirecta se basa en el manejo de los principios democráticos y en la participación interinstitucional para neutralizar la acción y el financiamiento de todos los agentes generadores de la violencia, como son la guerrilla, organizaciones y agentes vinculados al narcotráfico, al mismo tiempo fortalece el sistema judicial, y anticorrupción, acompañando su accionar con programas de desarrollo alternativo en áreas afectadas por el narcotráfico.

Esta lucha contra la denominada trilogía hobbesiana,¹¹ narcotráfico, guerrilla y paramilitares que, según el presidente Pastrana, perpetuará la pobreza y el desempleo, debe servir como argumento principal para movilizar la voluntad de la nación colombiana, así como también la de quienes tienen la responsabilidad de promover y preservar la seguridad, la democracia, la estabilidad y la paz en la región.

La oportunidad actual resulta la clave del éxito, si se considera el fortalecimiento militar alcanzado por los grupos subversivos, la ampliación e intensidad de la violencia y la conectividad con otros grupos armados y

terroristas, como el IRA y el ETA. Esta fortaleza se ha incrementado gracias a la existencia de la zona de distensión.

Las FARC han replanteado sus objetivos del valor estratégico, para incursionar con la guerrilla urbana y buscar un paso hacia la guerra civil, con la finalidad de debilitar aún más a las instituciones, obtener ventaja política para la negociación y entrar a la última fase de la guerra revolucionaria o guerra de movimiento, con la configuración de una fuerza regular convencional.

La influencia del conflicto vecinal ha transformado el problema social de pobreza en un problema de seguridad interna.

Con los factores de la situación descritos y su tendencia, podríamos atrevernos a insinuar tres tipos de escenarios prospectivos.

Uno de tipo *estatus quo*, hasta que en el largo plazo uno de los actores principales colapse, dando oportunidad para la delimitación de los términos de negociación por dominación.

Un segundo más optimista y definido, en el cual el gobierno logre, mediante persuasión, apoyo político internacional y respaldo de la opinión pública para realizar una negociación, como parte del proceso de pacificación.

Un escenario catastrófico de desintegración se daría como producto de la impotencia del gobierno ante la escala de la violencia proveniente de los diversos actores del conflicto, que motiven un repliegue de las fuerzas legales cediendo espacio e iniciativa a fuerzas subversivas para la conformación de un cogobierno si se conduce la negociación por la vía política o tras un nuevo largo período queden bajo control de las fuerzas subversivas grandes extensiones del territorio colombiano.

Este último escenario tendría una consecuencia regional, por cuanto la motivación del éxito serviría de émulo y ampliaría la coalición revolucionaria a escala regional.

No podemos estar seguros de que se cumplan los escenarios prospectivos pero sí podemos influir en los factores de la situación, que constituyen las variables y las tendencias que conformarán esos escenarios.

Por lo tanto, el apoyo político y la responsabilidad de una seguridad regional debe ser la respuesta de solidaridad y reciprocidad propias de una seguridad cooperativa regional, en la que se aspira compartir la estabilidad y el progreso como metas concretas del convivir internacional.

No obstante, de lo que sí estamos seguros es de las consecuencias que tendrá la tendencia bélica del conflicto, por cuanto incrementará os-

tensiblemente el tráfico ilícito de armas a través de la frontera, así como la conexión con grupos ilegales armados, incrementando la espiral de violencia y criminalidad, presionados por la necesidad de mayores recursos, ajustes de cuentas, y terrorismo selectivo, con grave afectación a las poblaciones fronterizas.

La ideología antiimperialista resultará un nuevo argumento ideológico para motivar la integración de grupos ilegales armados internacionales que estimulen el nacionalismo y la lucha reivindicacionista.

El efecto de las fumigaciones y la intensidad de las operaciones para combatir a las guerrillas y al narcotráfico se encuentra en directa proporción con el número de refugiados y desplazados; así como con la presencia de grupos y elementos insurgentes que buscan zonas santuarios y áreas geográficas de refugio, de traslado de los cultivos de coca y de los laboratorios clandestinos, escudándose en la soberanía de los países vecinos. Los proyectos de integración económica binacionales se verán afectados y obligarán a una revisión de los convenios que suman más de 300 entre Ecuador y Colombia, con la finalidad de facilitar el control del flujo de personas, bienes y servicios. El conflicto colombiano ratifica la confrontación ideológico conceptual que se vive en el mundo del nuevo siglo, a propósito de las debilidades actuales del Estado-nación. La seguridad nacional gira alrededor de las leyes, las instituciones, las autoridades y la soberanía, mientras que la seguridad humana gira en torno de la sociedad, las personas, los derechos y libertades, y una sensación efectiva de estar a salvo. Dilema que no ha dado resultado debido a la turbulencia política doméstica, a la desconfianza en las instituciones, heterogeneidad de los intereses de los actores y al distinto grado de hostilidad en que se vive, como producto de la naturaleza y diferente accionar de los grupos ilegales armados.¹²

La base de un nuevo paradigma estratégico de la seguridad regional parece estar bien clara. Las amenazas que ponen en riesgo a las estructuras del Estado colombiano no son de exclusiva competencia y resolución militar, no son excluyentes sino más bien son de carácter regional.

Por lo que al mismo tiempo que se aspira a evitar un colapso del Estado, la contaminación del conflicto o la dominación de las mafias que ha acuñado el término colombianización, se requiere preservar los objetivos nacionales permanentes, los intereses vitales de los estados, especialmente vecinos, al mismo tiempo que se mantenga la armonía en las relaciones entre estados.¹³

Esta base conceptual junto con un criterio preventivo es el que ha

servido al Estado ecuatoriano para delinear una política de seguridad para la frontera norte, que permita lograr un ambiente libre de amenazas, de coerción y de presiones, de manera que la nación en su conjunto pueda mantener la estabilidad, la paz y en forma independiente buscar su propio desarrollo y progreso, para lo cual será imprescindible contener la ampliación del conflicto.

Por una parte, para dar continuidad a los tratados y acuerdos, relacionados con el combate al narcotráfico, se viene aplicando desde 1999 el Plan Estratégico Antinarcóticos del Consejo Nacional de Substancias Psicotrópicas y Estupefacientes (CONSEP) y ha tenido un éxito notable.

Se plantea determinar como objetivos concretos de la política de seguridad de la frontera norte, el respeto al derecho internacional y a la no injerencia en asuntos de otro Estado.

Asimismo, proteger a la población, a los recursos y al ambiente, impulsar el desarrollo social y económico de la región, promover la cooperación tanto interinstitucional como internacional, fortalecer el respeto a la ley y mejorar la eficacia en un empleo conjunto de las FFAA. y la Policía Nacional.¹⁴

El centro de gravedad de la estrategia nacional llevará la Unidad de Desarrollo de Frontera Norte (UDENOR), creada para la dirección y ejecución de los proyectos de desarrollo social y económico de las regiones más deprimidas de la frontera. Se acompañará con programas de instrucción y monitoreo del respeto a los Derechos Humanos, así como el mejoramiento del sistema judicial y la reforma del Código de Procedimiento Penal, y la tecnificación de la Policía Judicial.

La eficacia de la seguridad depende de la capacidad de prevención, para lo cual es prioritario valorar la estabilidad y la paz, principal motivación para la unidad nacional, la cooperación y la solidaridad, sin las cuales no es posible forjar la condiciones necesarias para un destino de común prosperidad, tanto nacional como continental.

NOTAS

1. Klaus Bodemer, director del Instituto de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo, en una entrevista al diario *El Observador* de Montevideo (septiembre), 1997.
2. Francis Fukuyama, *El fin de la historia y el último hombre*, Planeta, 1992.
3. Alvin y Heidi Toffler, *El cambio del poder*, Plaza&Janés, 1990.
4. Hans Morgenthau, "A causa de la anarquía internacional del sistema cada estado debe mantener o incrementar su poder o sucumbir", en *Politics Among Nations*, Kenneth, N.Y., 1967.

5. SÍNTESIS Plan Colombia, "Un plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado", Conferencia de presentación del documento al Gobierno de EE.UU. (marzo), 2000.
En una evaluación preliminar los ingresos de las FARC en 1999 fueron: 55,3 por ciento del narcotráfico, 26,3 por ciento de la extorsión, 13,3 por ciento del secuestro, 4 por ciento del abigeato y 0,3 por ciento de asaltos, total: USD 987 255.
6. ONU, Asamblea General, Contra la delincuencia (nov. 16), 1999, Viena, Objetivo de la Convención: Promover la cooperación para prevenir, combatir más eficazmente a la delincuencia organizada transnacional.
7. Gabriel Marcella, "Plan Colombia: The Strategic and Operational Imperatives", en *Implementing Plan Colombia*, Special Series, SSI (abril), 2001.
8. William Zartman, *Collapsed States, The Desintegration and Restoration of Legitimate Authority*, Lynne Rienner, 1995.
9. Malcom Deas, conferencia sobre el Plan Colombia, sustentada en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito (agosto 24), 2001.
10. Apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia, Departamento de Estado de los Estados Unidos (febrero), 2001.
11. Joseph R. Núñez., "Fighting the Hobbesian Trinity in Colombia, a New Strategy for Peace", en *Implementing Plan Colombia*, Special Series, SSI, USAWC (April), 2001.
12. Adrián Bonilla, "El conflicto colombiano y su proyección", presentado en el Seminario organizado por la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, Quito (abril), 2000.
13. David Jordan, *Drug Politics: Dirty Money and Democracies*, Norman, U. Oklahoma, cita de Joseph Núñez, en su obra: *Fighting the Hobbesian Trinity in Colombia*, (April), 2001.
14. Oswaldo Jarrín, "Seguridad y desarrollo", en *Temas*, revista del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, edición especial, Quito (marzo), 2001.

